

UN FANTASMA RECORRE MEXICO: 1988

Entre las reglas tradicionales de la política del poder en México hay una que dice: el que la hace no tiene por qué pagarla. Esa es precisamente la esencia de un sistema democrático: no hay forma de obligar al gobernante a responder por sus acciones. Sin embargo, como sucede con las reglas de esta especie, hay excepciones. Hoy vivimos una de ellas: quienes la hicieron la están pagando -los que ensuciaron la elección del 88-, aunque desafortunadamente no como debieran ni solamente ellos.

En este difícil fin de sexenio se está abriendo la posibilidad de que coincida la nueva elección federal con la conclusión de una época, con el término de una forma de hacer política y, quizá, con el fin de un régimen. En una coyuntura tan delicada, tan llena de posibilidades como de peligros, el grupo en el poder necesita con urgencia que haya confianza en el proceso electoral, en las instituciones. Desafortunadamente, el recuerdo de la infame "caída" del sistema de cómputo el 6 de julio de 1988, aún está muy vivo en la memoria colectiva y se ha convertido en un obstáculo formidable para quienes buscan la credibilidad institucional. Hoy, ni siquiera la tercera y única reforma política real del sexenio -la de 1944- está logrando remontar la cuesta de incredulidad que fue creada por la contradicción entre lo dicho y lo hecho en materia política.

Carlos Salinas de Gortari no fue, desde luego, el único responsable de la supuesta caída del sistema de cómputo electoral hace seis años, pero sin duda fue el principal beneficiario. Es en él donde se centra hoy la desconfianza. Hasta fines del año pasado, la falta de credibilidad de la elección presidencial de 1988 no pareció ser un problema para el responsable del Poder Ejecutivo; gracias a una alianza de cúpulas para el cambio neoliberal, el presidente pudo contar con el respaldo interno y externo suficiente para imponer su proyecto económico y que culminó con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) en 1993. Sin embargo, a partir de enero de 1994 el control del proceso político empezó a escapar de las manos presidenciales como resultado del estallido de la rebelión chiapaneca. Fue entonces cuando el fantasma del 88 se materializó y la Presidencia empezó a cosechar la amarga semilla que había sembrado seis años atrás. Sin elecciones creíbles por segunda vez consecutiva, no sólo el próximo gobierno va a tener problemas, sino la sociedad en su conjunto.

La falta de credibilidad en las instituciones es tan clara que se le pueden poner números. Una encuesta que llevó a cabo Alianza Cívica el mes pasado, dio por resultado que casi la mitad de los entrevistados consideraran que el 21 de agosto habría fraude electoral (*Reforma*, 29 de junio) En la última encuesta de MORI de México/*Este País* (13 de julio), el resultado es casi el mismo: el 45 por ciento de los encuestados

dijo confiar en que su voto sería respetado pero una proporción mayor, el 55 por ciento no sabía o de plano negaba que la elección pudiera ser limpia. Así pues, resulta que el fantasma del 88 está vivo; ronda lo mismo por los corredores de Palacio, que en las calles. En esas condiciones no va a ser fácil controlar el resultado final de un proceso donde los enconos toman fuerza y los muros institucionales son débiles.

La persistencia de la incredulidad respecto al proceso electoral que viene, no es más que el indicador más reciente de la añeja pero creciente disfuncionalidad del arreglo institucional vigente. En efecto, mientras no haya acuerdo entre la naturaleza de las reglas que deben de regir el proceso electoral -que no es otra cosa que la lucha incruenta por la asignación de obligaciones y beneficios en el proceso de reproducción social- no habrá modernidad administrativa y económica reales.

Por lo pronto, las fallas del sistema político vigente están acumulando e introduciendo incertidumbres que ya están afectando a la economía. Y conviene recordar que la economía es precisamente el corazón del proyecto salinista; su razón de ser y la justificación implícita de haber recurrido en 1988 a la "caída del sistema" para asegurar el triunfo de la reforma neoliberal.

La viabilidad del nuevo modelo económico depende y seguirá dependiendo por varios años más, de un ingreso extraordinario de capital extranjero. Y hasta hoy ese ingreso se había

logrado. Entre enero de 1989 y el primer semestre de 1994, entraron a México como inversión directa e indirecta, 48 mil 773 millones de dólares por pagos al capital (*La Jornada*, 19 de julio). En principio, se trata de un éxito sin precedente histórico en nuestro país y resultó ser, ni más ni menos, que el doble del monto que originalmente se tenía previsto. Sin embargo, lo que ya no está tan bien, es que una buena parte de esos capitales se dirigieron a la compra de papel mexicano, a la especulación y no a la que ese necesita con urgencia: la inversión productiva; esa que crea empleo, exportaciones y genera las divisas necesarias para mantener la balanza en equilibrio en el largo plazo.

Pero dejemos de lado las consideraciones sobre la ambigua naturaleza del capital externo que ha llegado al país. Es un hecho que la historia reciente de éxito en México como captador de capital foráneo, parece haber entrado en un paréntesis, y las razones son básicamente políticas. En este momento el flujo de capitales del exterior se encuentra prácticamente suspendido por los temores de los inversionistas ante lo que puede ocurrir por unas elecciones llevadas a cabo sin la estructura institucional adecuada. En contraste, las importaciones mexicanas continúan creciendo; el déficit comercial de 1993 fue de 13.4 mil millones de dólares y de 8.9 mil millones de dólares en lo que va del año. Las reservas del Banco de México, que se contabilizaron en 24.5 mil millones de dólares en enero, han bajado; algunos analistas la sitúan en los 17 mil millones

de dólares, pero otros en apenas 10 mil millones (Gustavo Lomelí, *El Financiero*, 25 de julio y *La Jornada*, misma fecha). Sea como fuere, en las dos últimas semanas han salido 750 millones de dólares de inversionistas extranjeros y ahorradores mexicanos nerviosos. Y todo esto ocurre cuando: a) la bolsa de valores registra una pérdida real acumulada de 15.8 por ciento, b) la cartera vencida de los bancos aumenta (para junio fue de 8.1 por ciento), c) el crecimiento anual se calcula en apenas un pobre 1.2 por ciento (inferior al aumento demográfico), y d) vuelven a aumentar las ya de por sí altas tasas de interés: casi 18 por ciento los Cetes (datos tomados de *Enfoque*, 24 de julio). Así pues, la estabilidad de una economía mexicana que aún no logra salir de la recesión del año pasado, se encuentra prendida con alfileres... y los vientos políticos la pueden desprender.

Para introducir confiabilidad en la disputa electoral y en la transición del autoritarismo a la democracia, para responder al reto formidable que le lanzó el primero de enero el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para neutralizar la movilización iniciada por el cardenismo y por organizaciones no gubernamentales, el presidente Salinas llevó a cabo en este año la tercera reforma electoral del sexenio, cuya parte medular consistió en hacer lo que por cinco años declaró que no se podría: quitar el control del Instituto Federal Electoral (IFE) de manos del gobierno, de su partido y de los partidos paraestatales y ponerlo en la de seis ciudadanos independientes

y de buena reputación. Luego vino una gran auditoría avalada por esos seis ciudadanos, después de decisión de publicar las listas de electores, el nombramiento de un subprocurador especial para los delitos electorales (que no está libre de sospecha, como lo señalara Carlos Ramírez en "Archivo político" de *El Financiero*, 24 de julio), una disminución en la vieja y famosa inequidad y parcialidad de la televisión respecto de los partidos de oposición real, el ofrecimiento de resultados parciales el día mismo de la elección, etcétera. Y coronando todo, el ofrecimiento -innecesario en un sistema democrático, sorprendente en uno que no lo es- del presidente: "Transmitiré el Poder Ejecutivo Federal a quien resulte triunfador... independientemente del partido político al que pertenezca", más la advertencia presidencial, en Los Pinos a gobernadores y presidentes municipales de que no se deben comportar como en el pasado, que hoy sí deben ser imparciales frente a los partidos.

Pareciera así que el avance hacia un sistema electoral imparcial y moderno es real, que por fin llegó la tan esperada transición mexicana a la democracia. Y sin embargo, la sospecha sigue viva pues el partido de Estado (o del Estado) también sigue vivo. Y mientras esto sea así, no se puede aceptar el supuesto de elecciones limpias el 21 de agosto.

De que el partido de Estado sigue en pie, no cabe duda. Ahí está, como botón de muestra, la interceptación reciente de las llamadas telefónicas entre funcionarios del gobierno de Veracruz por un lado y miembros de la comitiva del candidato

del PRI y de Televisa por otro, donde queda claro que continúa el uso ilegal de recursos estatales para la campaña del PRI (*Proceso*, 25 de julio). La actividad febril de Procampo en vísperas de las elecciones, no puede ser mera coincidencia. La negativa gubernamental a compactar casillas sin representación de oposición puedan vigilar 96 mil de ellas, y todos sabemos que casillas sin representación de la oposición, son casillas que se lleva el PRI. Y está el IFE mismo; es un gran avance tener al frente de la compleja institución a personas tan honorables como los seis consejeros ciudadanos, pero abajo de ellos está una enorme burocracia. Y esta burocracia fue creada antes de que los consejeros ciudadanos llegaran a sus puestos, cuando, sin el menor empacho, el director general del IFE podía cambiar su puesto por el del candidato del PRI a gobernador. Los consejos distritales y estatales del IFE siguen integrados básicamente, por el personal tradicional, y es ahí donde tradicionalmente se hace el fraude, donde se esconden los "mapaches". Hace tiempo que Max Weber observó que las burocracias tienden y pueden expropiar el poder de los responsables políticos, en este caso de los consejeros ciudadanos.

En fin, como lo señalara el consejero José Agustín Ortiz Pinchetti en una reunión con el grupo de San Ángel: la herida que causó la elección del 88 a la dignidad ciudadana sigue abierta. Y es justamente por esa herida que se cuele hoy la duda. Los que ahora piden confianza son los mismos que

defraudaron esa confianza en el pasado. Ahora bien, si sólo fueran ellos los afectados, el asunto no importaría, pero es un hecho que en ese ambiente de incertidumbre todos podemos salir malparados. Hay que usar hasta el último minuto para disminuir la desconfianza -eliminarla es ya imposible- y aumentar la credibilidad.